

|                     |   |
|---------------------|---|
| Auto interlocutorio | 566   |
| Radicado            | 05266-31-03-001-2020-00136-00                                   |
| Proceso             | Ejecutivo   |
| Demandante (s)      | Gloria Estela Londoño Chavarría                                 |
| Demandado (s)       | Construredes Grupo Gómez S.A.S. y Samuel de Jesús Gómez Holguín |
| Tema y subtemas     | No repone auto- concede apelación                               |

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE  
ENVIGADO

Veinticinco de octubre de dos mil veintiuno

Se decide el recurso de reposición interpuesto por la apoderada judicial de la demandante, en relación con el auto dictado el 7 de octubre de 2020, por medio del cual se negó el mandamiento de pago.

Del motivo de la inconformidad:

Aduce la recurrente, que el auto que negó el mandamiento de pago está fundado en que el documento presentado no tiene la calidad de mérito ejecutivo, por no estar vertido el acuerdo de los compañeros permanentes en una escritura pública, y que aunque coincide con el titular del despacho en lo concerniente a que el documento privado denominado “*Declaración de Unión Marital de Hecho entre Compañeros Permanentes, disolución de la Unión Marital, Cesación de Efectos Civiles y Liquidación de Sociedad Patrimonial*”, carece de toda eficacia legal para efectos de esta declaratoria, considera que ello no implica que las obligaciones allí adquiridas no tengan relevancia legal.

Indicó, además, que tal documento no puede ser usado para otros asuntos por carecer de la formalidad de la escritura pública y que, en el caso de títulos ejecutivos, puede ser cualquier documento que cumpla con los requisitos formales para tener esa calidad, es decir, ser claro, expreso y exigible,

conforme al artículo 422 del C.G.P., con lo que se puede iniciar una acción de cobro. Señaló, que cualquier documento o contrato con dichos requisitos, constituye un título ejecutivo, base primordial del proceso ejecutivo, argumentando que no todos los contratos prestan mérito ejecutivo, y que por ello las partes hicieron una declaración en una de las cláusulas de que el documento presta mérito ejecutivo, e igualmente afirmó que el documento no tiene que ser firmado ante notario para prestar tal mérito, y que en este caso se hizo para que posteriormente no se niegue la firma de éste.

Precisó que del documento objeto de este proceso, se deriva la certeza del derecho de la acreedora y la obligación del deudor, que es clara y expresa, de una suma de dinero y con una fecha de vencimiento específicas, y expresó que es prevalente el derecho sustancial sobre las formas, reiterando que si bien es cierto que el documento aportado no es eficaz para la declaración de la unión marital de hecho, no quiere decir ello que su contenido deba ser desconocido por el juez, por no estar en escritura pública, pues en el presente proceso no se está solicitando al juzgador el reconocimiento de dicho documentos para otros fines en los cuales la escritura pública sí sea exigida, y por tanto, no le es dable por tanto al Juez negar el mandamiento de pago por falta de requisitos formales, dado que esta es tarea exclusiva del demandado al momento de contestar la demanda.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se revoque el auto que negó el mandamiento ejecutivo y que en caso de no accederse a ello, se conceda el recurso de apelación y se envíe el expediente al superior.

### CONSIDERACIONES:

1. El artículo 5° de la Ley 54 de 1990, establece que la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes se disuelve:

*“a) Por la muerte de uno o de ambos compañeros;*

- b) *Por el matrimonio de uno o de ambos compañeros con personas distintas de quienes forman parte de la sociedad patrimonial;*
- c) *Por mutuo consentimiento de los compañeros permanentes **elevado a escritura pública**;*
- d) *Por sentencia judicial”* (Subraya intencional).

2. A su turno, el artículo 1820 del Código Civil, aplicable para estos casos en virtud de lo dispuesto en la ley antes citada, dispone que el acuerdo entre los compañeros permanentes debe ser elevado a escrito pública, en la que se deberán incorporar el inventario de bienes y deudas sociales y su liquidación.

3. No se desconoce que, en línea de principio, la falta de la solemnidad de elevar a escritura pública un determinado acuerdo de voluntades cuando así lo exija la ley, no conlleva per se, que el documento que la contenga no pueda ser tomado como documento privado y, si de él se desprenden obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo de uno de los contratantes, puedan ser ejecutadas.

Ese es un principio, ínsito en el art. 259 del C.G. del P., al disponer: “*El instrumento que no tenga el carácter de público por incompetencia del funcionario o por otra falta en la forma se tendrá como documento privado si estuviere suscrito por las partes*” (resaltos intencionales).

4. Sin embargo, en el presente caso lo que pretende la parte demandante, sin lugar a dudas, es que se ejecute lo pactado en una fallida liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes que tuvo con el demandado, que no tiene ninguna eficacia, pues no fue elevada a la solemnidad de la escritura pública, tal como lo exige la ley.

5. Es que en el caso que nos ocupa, no pueden desligarse los actos jurídicos contenidos en el referido documento privado y, mucho menos, la voluntad de las partes. Sin duda, su intención fue efectuar una declaración de existencia de unión marital de hecho entre compañeros permanentes y **proceder a su liquidación**; luego, si no lo hicieron por los cauces legales, los referidos actos no tienen eficacia legal.

No se puede pretender ahora, decir que lo consignado en el acápite de liquidación puede ser ejecutado, porque allí constan obligaciones expresas, claras y exigibles, pues provienen del deudor.

Con este equivocado raciocinio, se desconocería de tajo lo establecido en el art. 1760 del Código Civil, en cuanto consagra que la falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en los que la ley requiere esa solemnidad, porque ella es *ad substantiam actus*.

6. En concordancia con lo anterior, y conforme a lo expuesto en el auto recurrido, para este juzgador, el documento allegado como título ejecutivo, no cuenta con eficacia para proferir mandamiento de pago en contra de los demandados, toda vez que como ya se dijo, era necesario que el acuerdo celebrado entre los compañeros permanentes hubiera sido elevado a escritura pública, y la razón no es otra que precisamente lo que se cobra es relacionado directamente con la sociedad patrimonial que se pretende disolver, por lo que sin la solemnidad respectiva no es posible predicarse que el supuesto deudor está en la obligación de cancelar lo allí dispuesto, es decir, no es dable ahora, librar un mandamiento de pago, cuando la declaratoria de la sociedad conyugal y su liquidación, no tienen eficacia por no haberse elevado a escritura pública.

Sobre el convencimiento del fallador sobre la ejecutividad del título, el desaparecido procesalista Hernando Morales Molina expresó que “[e]sto no implica que falte totalmente el conocimiento o análisis de la pretensión por parte del juez,

*pues cuando se dirige a éste una demanda de ejecución, debe ante todo examinar de oficio si existe un título ejecutivo que la respalde, y si dicho título no aparece deberá negar la ejecución, como denegada es la sentencia favorable si no se halla comprobada la pretensión correspondiente”<sup>1</sup>.*

7. Así las cosas, y sin necesidad de pronunciamiento adicional a los acabados de referir, se mantendrá la decisión objeto de inconformidad por la parte actora, por cuanto ello fue materia de amplio análisis jurídico en el auto que es blanco de impugnación, en el cual sustentó la decisión de negar el mandamiento de pago, por el hecho de carecer de la escritura pública mencionada.

Por lo expuesto anteriormente, se

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** No reponer la providencia recurrida.

**SEGUNDO:** Conceder, en el efecto suspensivo, el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la ejecutante, contra la providencia que negó el mandamiento de pago, para lo cual, se hará el envío del expediente digital, a la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín.

**NOTIFIQUESE**

  
GERMÁN ALONSO FLÓREZ HINCAPIÉ  
JUEZ


---

<sup>1</sup> Curso de Derecho Procesal Civil. Parte Especial Ed. A.B.C. Bogotá. 1983. Pág. 161.

CERTIFICO

Que el auto anterior fue notificado en estado No. 148, fijado hoy en la Secretaría del Juzgado a las 8 am

Envigado, noviembre 12 del 2021.



Tatiana Corrales Ramírez  
Secretaria